

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D. C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO:	569
RADICACIÓN:	11001-33-35-027-2018-00382-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	MAURICIO RIVEROS ALDANA
DEMANDADA:	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
ASUNTO:	Desestima recurso reposición y ordena remisión de expediente digital para surtir recurso de queja

Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintidós (2022).

Surtido el traslado de que trata el artículo 319 del CGP, aplicable por reenvío del artículo 242 del CPACA, se procede a resolver el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra el auto interlocutorio No. 136 del 28 de febrero de 2022, notificado por estado el 1 de marzo del mismo año (fl. 125), mediante el cual se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia No. 157 dictada en la audiencia inicial llevada a cabo el 8 de septiembre de 2021 (fls. 112 a 114).

La parte recurrente alega que la jurisdicción debe propender por la protección del principio a la doble instancia, dado que permite que los presuntos errores en los que pueda incurrir el juez al momento de adoptar una decisión de fondo puedan ser corregidos, principio que no tuvo en cuenta el juzgado al momento de proferir el auto recurrido y, por ende, se obstruye el derecho al debido proceso de su representado.

Agregó que el escrito contentivo del recurso de apelación que promovió contra la sentencia de primera instancia, toma nuevamente las referencias jurisprudenciales de los alegatos de conclusión, así como la construcción del silogismo respecto de la aplicación del juicio integrado de igualdad, los cuales no constituyen motivo para negar la concesión de la alzada, toda vez que su intención se circunscribe a que la segunda instancia verifique nuevamente dichos aspectos, y resaltó que la Ley 1437 de 2011 no preceptúa la posibilidad de declarar desierto el recurso de apelación por insuficiencia argumentativa sino por su extemporaneidad.

Pues bien, de conformidad con el artículo 242 del CPACA, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, el recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario, de forma que el auto interlocutorio No. 136 del 28 de febrero de 2022, es susceptible de tal recurso, dado que no se encuentra enlistado en el artículo 243A *ejusdem*.

Descendiendo al caso, el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, consagra el trámite del recurso de apelación contra la sentencia, así:

"ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. <Artículo modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias dictadas en audiencia.

2. Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio, total o parcialmente, y contra este se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado ponente citará a audiencia de conciliación que deberá celebrarse antes de resolverse sobre la concesión del recurso, siempre y cuando las partes de común acuerdo soliciten su realización y propongan fórmula conciliatoria.

3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior. Recibido el expediente por el superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos (...).

De la norma en cita, se concluye que el legislador estableció los requisitos mínimos que deben cumplirse para la concesión del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, entre los cuales se encuentra la sustentación de la alzada y, a su turno, el artículo 322 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, preceptúa que el apelante al momento de promover el recurso *“deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión (...)”*. Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada.

Sobre el particular, el Consejo de Estado en providencia del 15 de julio de 2015¹, precisó:

“Téngase presente que la exigencia que consagra la ley para que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia deba sustentarse no es, una simple formalidad irrelevante para el proceso, a tal punto que su inobservancia bajo el anterior estatuto acarreaba la declaratoria de desierto del recurso y, por contera, la ejecutoria de la providencia que se pretende impugnaba. El CPACA nada dice al respecto, sin embargo de las normas que regulan el recurso de apelación se concluye que si la sustentación no contiene motivo de inconformidad, no puede acometer la Sala estudio alguno porque no existe argumento frente al que deba pronunciarse”.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia del 26 de agosto de 2020², indicó:

«Ahora bien, desde la perspectiva puramente normativa, observa la Sala que tanto en el CPACA como el CGP existen claramente unas disposiciones que regulan los recursos contra autos y sentencias, donde se establecen unos requisitos mínimos para su procedencia como para su efectividad.

(...)

*El artículo 322 establece que el apelante deberá “sustentar el recurso ante el juez”, que el juez resolverá el recurso “así no haya sido sustentado”. En cuanto a las exigencias de la sustentación estable que el apelante “deberá **precisar**, de manera **breve**, los reparos **concretos** que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior. Para la sustentación será **suficiente que el recurrente exprese las razones** de su inconformidad con la providencia apelada”. Asimismo, exige que para que el recurso no sea declarado desierto debe ser sustentado en “**debida forma** y de manera oportuna” o cuando “no se **precisen los reparos a la sentencia** apelada, en la forma prevista en este numeral”.*

El Consejo de Estado en esta materia ha sostenido que las razones o argumentos: a) Son el contenido de la sustentación, por tanto, “si no existen dichas razones o motivos de discrepancia con la sentencia dictada el recurso carece de objeto”; b) Sirven de límite a la competencia de la segunda instancia: “la competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el escrito de sustentación del recurso de apelación y no por el mero acto procesal dispositivo

¹ Expediente No. 25000-23-42-000-2012-00491-0, I.C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez (E)

² Expediente No. 11001-33-36-034-2015-00342-01, M. P. Dr. José Élvor Muñoz Barrera.

de parte, a través del cual manifiesta, de manera abstracta, impugnar la respectiva providencia”; c) La sustentación consiste en “confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o apreciaciones”, como también “señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis presentada.”

Desde el anterior marco, esta Sala comprende que la apelación es un verdadero ejercicio argumentativo normatizado y ha adoptado los requisitos de claras, específicas, pertinentes y suficientes de la Corte Constitucional, para dar por cumplido el requisito de sustentación del recurso. De esta manera las exigencias normativas son: precisos, concretos, breves, suficientes y pertinentes.

Claridad. La argumentación no puede convertirse en algo etéreo sino que el argumento debe ser “**concreto**”, inteligible y comprensible, que le permita al juez de segunda instancia establecer cuáles son los reparos que tiene el apelante frente a la decisión del a quo. El argumento debe seguir un hilo conductor que permita al juez de segunda instancia comprender el contenido de su recurso y las justificaciones en las que se basa.

Precisos. Los argumentos deben (sic) puntuales o con cierto grado de certeza frente a la decisión debatida, es decir, “**precisar...los reparos**”, identificar y determinar la parte de la estructura argumentativa de la providencia judicial que es objeto del desacuerdo. En virtud del principio de congruencia, e incluso del derecho de defensa y contradicción de la contraparte, el juez de segunda instancia no puede decidir a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” frente a la decisión judicial sin identificar o precisar la norma, el hecho, la interpretación, la tesis, en fin, con la que está en desacuerdo.

Pertinencia. La norma establece que el objeto de la apelación es que se “examine la cuestión decidida” o se precisen los “reparos a la sentencia”. Es decir, el argumento es pertinente cuando tiene que ver o se refiere a la “**cuestión**” o “**sentencia**”, es decir, es algo sustantivo toda vez que supone que se conocen y maneja adecuada y eficazmente los recursos fácticos o jurídicos o lógicos que se requieren para controvertir la decisión. También quiere decir que el reproche formulado por el apelante supone lo pedido en la demanda, lo expuesto en la contestación o lo probado durante el proceso, según sea el caso, y por supuesto con lo resuelto por el juez de primera instancia. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que el apelante en realidad no está acusando el contenido de la sentencia de primera instancia sino que está utilizando el recurso para insistir en argumentos o asuntos que ya fueron resueltos por el juez de primera instancia.

Suficiencia. La norma se refiere a que para que se entienda sustentado el recurso “será **suficiente** que el recurrente exprese las **razones de inconformidad**”, luego el requisito de suficiencia debe ser cumplido. El argumento es suficiente cuanto es apto e idóneo, mínimo y necesario, que le permita al juez entrar o abordar el análisis sobre la inconformidad. La suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo del recurso, esto es, a la presentación de razones que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que debe revocarse o modificarse la sentencia de primera instancia, sí despiertan una duda mínima sobre tal asunto.

Finalmente, la Sala considera que, si bien la norma procesal y la jurisprudencia han tocado estos requisitos, al juez le corresponde también la carga argumentativa para resolver si efectivamente se incumple alguno de ellos y con base en ello, determinar si se sustentó el recurso. Pero una cosa es falta de sustentación por carecer de alguno de los requisitos expuestos y otra cosa es inexistencia de un argumento. Éste entendido como “un conjunto de enunciado en el cual un subconjunto de dichos enunciados constituye las razones para aceptar otro de los enunciados que lo componen. A los enunciados que constituyen las razones se los denomina premisas, y a los enunciados que se pretende apoyar con éstas se lo llaman conclusiones”. Puede que se haya construido un argumento, pero sin ninguna fuerza de persuasión por falta de alguno de las exigencias expuestas o que a pesar de exponerse alguno también carezca de solidez. En uno u otro caso, se debe declarar falta de sustentación o motivación».

De acuerdo con la jurisprudencia, el apelante debía precisar de manera breve las razones de inconformidad contra la sentencia, pues de no exponer los reparos que sustentan la alzada, lo procedente era declarar desierto el recurso, pese a ser promovido en tiempo.

Ahora, milita en el plenario correo electrónico del 9 de septiembre de 2021, a través del cual el doctor Hans Alexander Villalobos Díaz manifestó que “*obrando como apoderado especial de la parte actora, con mi debido y acostumbrado respeto me permito presentar ante su honorable despacho **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN***” y, luego, de exponer la jurisprudencia que considera es aplicable al sub examine y de solicitar que se realice el juicio integrado de igualdad, deprecó “*conceder las suplicas (sic) de la demanda*” (fls. 216 a 220), de forma tal, que lo plasmado en dicho escrito no obedece al sustento del recurso de apelación interpuesto en la audiencia inicial celebrada el 8 de septiembre de 2021 contra la sentencia No. 157 allí dictada, pues no enuncia de forma concreta los reparos frente a los argumentos expuestos por el juzgado para negar las pretensiones de la demanda.

De otro lado, cabe advertir que para que se concrete el principio de la doble instancia, deben cumplirse los requisitos previos que estableció el legislador para la concesión del recurso de apelación, toda vez que dicho principio no resulta obligatorio, por cuanto existen elementos que justifican su limitación.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-418 de 2019, aplicable *mutatis mutandi* al caso que nos ocupa, precisó:

“(...) la garantía de la doble instancia supone un elemento cardinal del derecho al debido proceso que, a su vez, tiene relevancia en el acceso a la administración de justicia y que se materializa, principalmente, mediante el recurso de apelación o de impugnación, toda vez que permite la controversia de una decisión judicial por parte de quien tiene interés en ella o le resulta desfavorable, para que sea revisada por parte del superior jerárquico[205].

8.8. Precisamente, por vía de la apelación se garantiza la posibilidad de controvertir las decisiones judiciales que resulten adversas. Tales decisiones, particularmente en el caso de las sentencias, están revestidas de una presunción de corrección, al punto de que, si no son recurridas, quedan en firme y constituyen la definición concluyente del asunto. Dada la complejidad del derecho e incluso la falibilidad de las personas, se garantiza la oportunidad de recurrir en apelación.

*8.9. Particularmente, si la decisión inicial es correcta, la apelación no debe convertirse en el instrumento a través del cual se pretenda probar suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudir a ella en aquellos supuestos en los que existan elementos sólidos que den cuenta de que el juzgador de primera instancia incurrió en una equivocación. **Eso explica por qué se exige que la apelación deba ser sustentada. Porque para controvertir una decisión judicial y provocar la intervención del superior, con lo que eso implica en términos de desgaste del aparato judicial, y en merma de la seguridad jurídica, es preciso mostrar razones serias que generen en el fallador una cierta duda sobre el asunto recurrido, o, al menos, que se planteen de manera clara y argumentada las razones de la discrepancia.***

(...)

*9.5. Como se puede advertir, en lo tocante a la sustentación del recurso de apelación, el Código General del Proceso sí distingue reglas para los autos y las sentencias. Frente a estas últimas, el numeral 3º del artículo 322 dispone expresamente que, cuando se recurra una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferido en ella, o dentro de los tres días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, **deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos frente a la decisión que cuestiona, sobre los cuales versará la***

sustentación que hará ante el superior, para la cual bastará con la expresión de las razones de inconformidad con la providencia apelada. Esto quiere decir que, cuando no se presente la fundamentación requerida para el recurso en los términos recién descritos, el juez lo declarará desierto (negrita ajena al texto).

De acuerdo con lo expuesto, es innegable que en el caso *sub examine* debe mantenerse incólume el auto interlocutorio No. 136 del 28 de febrero de 2022, pues, se itera, el apoderado de la parte actora en el escrito allegado a través de correo electrónico el 9 de septiembre de 2021, presentó alegatos de conclusión, omitiendo sustentar el recurso de apelación que instauró contra la sentencia de primera instancia, requisito *sine qua non* para que proceda la concesión de la alzada.

Finalmente, frente al recurso de queja interpuesto en forma subsidiaria por la parte demandante, el artículo 245 del CPACA, modificado por el artículo 65 de la Ley 2080 de 2021, preceptúa que se interpondrá ante el superior cuando no se conceda, se rechace o se declare desierta la apelación o se confiera en un efecto diferente, para que se conceda si fuera procedente o corrija tal equivocación, según sea el caso; mientras que el artículo 353 del CGP, aplicable por remisión de la referida norma, consagra que tal recurso "(...) deberá interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que denegó la apelación o la casación, salvo cuando este sea consecuencia de la reposición interpuesta por la parte contraria, caso en el cual deberá interponerse directamente dentro de la ejecutoria. Denegada la reposición, o interpuesta la queja, según el caso, el juez ordenará la reproducción de las piezas procesales necesarias, para lo cual se procederá en la forma prevista para el trámite de la apelación (...)"(Subrayado fuera de texto) y, a su turno, el párrafo del artículo 324 de dicha codificación estableció que "Cuando el juez de primera instancia tenga habilitado el Plan de Justicia Digital, el conocimiento del asunto en segunda instancia sólo podrá ser asignado a un despacho que haga parte del mismo sistema. En ningún caso podrá ordenarse la impresión del expediente digital", razón por la cual se ordenará remitir el enlace o *link* del expediente digital al superior funcional para los efectos legales pertinentes, respecto de las siguientes piezas procesales: i) audiencia inicial llevada a cabo el 8 de septiembre de 2021 (fls. 112 a 114); ii) escrito presentado por el apoderado de la parte actora vía correo electrónico el 9 de septiembre de 2021 (fls. 115 a 120); iii) auto interlocutorio No. 136 del 28 de febrero de 2022 (fl. 125); y iv) recurso de reposición y en subsidio expedición de copias promovido el 3 de marzo de 2022 (fls. 127 a 128).

En mérito de lo expuesto, se dispone:

- 1.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante contra el auto interlocutorio No. 136 del 28 de febrero de 2022.
- 2.- REMITIR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, dentro de los cinco (5) días subsiguientes, el enlace o *link* del expediente digital respecto de las siguientes piezas procesales: i) audiencia inicial llevada a cabo el 8 de septiembre de 2021 (fls. 112 a 114); ii) escrito presentado por el apoderado de la parte actora vía correo electrónico el 9 de septiembre de 2021 (fls. 115 a 120); iii) auto interlocutorio No. 136 del 28 de febrero de 2022 (fl. 125); y iv) recurso de reposición y en subsidio expedición de copias promovido el 4 de marzo de 2022 (fls. 127 a 128), para que, salvo mejor criterio, se surta el trámite del recurso de queja interpuesto por la parte demandante.

3.- La presente providencia se notificará también por estado de acuerdo a lo establecido en el artículo 201 del CPACA, el cual podrá ser consultado en el portal de la Rama Judicial (www.ramajudicial.gov.co). Se conservará registro del original de este proveído en la ubicación compartida de almacenamiento virtual de este despacho.

NOTIFÍQUESE

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval border. The signature is stylized and appears to be 'Humberto López Narváez'.

HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ

Juez

CHR